

Economías ilícitas vs. Recursos naturales

www.360geopolitica.org

La Amazonía y la Cuenca del Congo ya no deberían ser consideradas principalmente como cuestiones de política ambiental. Están emergiendo como escenarios estratégicos donde convergen cada vez más los recursos naturales, el crimen organizado, el control territorial, la seguridad climática, la seguridad alimentaria, los minerales críticos, el poder político y la competencia internacional.

Estos bosques contienen extraordinarias reservas de biodiversidad, carbono y agua dulce, pero también rodean algunas de las materias primas más valiosas del mundo, entre ellas oro, cobre, cobalto, litio, madera, soya, ganado y, en Colombia, coca. Por lo tanto, su protección se está volviendo inseparable de las cuestiones relacionadas con el desarrollo económico, la seguridad nacional y la estabilidad internacional.

El problema político central es una asimetría de incentivos. Las ganancias provenientes de la extracción de oro, madera, ganado, minerales, narcóticos y otras materias primas son inmediatas, concentradas y, con frecuencia, capturadas por grupos relativamente pequeños, en su mayoría actores ilegales.

Los beneficios de mantener los bosques intactos —regulación climática, seguridad hídrica, biodiversidad, almacenamiento de carbono y estabilidad de los ecosistemas— son difusos, de largo plazo y globales. Por lo tanto, el sistema económico frecuentemente recompensa la destrucción más rápidamente que la conservación. El desafío estratégico consiste en revertir ese cálculo y crear condiciones en las que proteger los bosques resulte económica y políticamente más valioso que destruirlos.

La Cuenca del Congo es particularmente importante porque contiene el segundo sistema de bosque tropical más grande del mundo después de la Amazonía, y la República Democrática del Congo contiene la mayor parte de la selva de la cuenca. Investigaciones recientes indican que la pérdida forestal sigue siendo considerable. Una evaluación de 2026 estimó que aproximadamente 780.000 hectáreas de bosque primario se perdieron en toda la Cuenca del Congo en 2024, lo que representa un aumento en la tasa de pérdida en comparación con 2023.

La República Democrática del Congo representó más de tres cuartas partes de la pérdida regional de bosque primario. Las presiones no se limitan a la extracción industrial; la agricultura de pequeña escala, la producción de carbón vegetal, la tala, el crecimiento demográfico y la infraestructura también son importantes factores de degradación forestal.

La minería crea un problema estratégico particularmente importante porque su huella ambiental puede extenderse mucho más allá de los límites físicos de la mina. Investigaciones realizadas en el este del Congo han encontrado que la minería artesanal puede desencadenar deforestación a varios kilómetros de los sitios mineros debido a que los asentamientos, la agricultura y la infraestructura se desarrollan alrededor de las zonas de extracción.

Investigaciones más recientes en el África subsahariana sugieren que la huella indirecta de la minería puede extenderse considerablemente más lejos, ya que las carreteras, los asentamientos y la expansión agrícola asociados con la minería producen una pérdida forestal

sustancialmente mayor que el área directamente despejada por la propia mina. Por lo tanto, una mina no es simplemente una mina. Puede convertirse en el núcleo de un sistema económico mucho más amplio que involucra carreteras, migración, asentamientos, agricultura, infraestructura energética y comercio informal.

Este problema es particularmente significativo porque la República Democrática del Congo posee muchos de los minerales necesarios para la transición energética mundial, incluido el cobalto y el cobre, además de otros recursos estratégicamente importantes. El mundo necesita estos minerales para baterías, redes eléctricas, vehículos eléctricos, tecnologías renovables, infraestructura digital y manufactura moderna. Por lo tanto, el Congo no es periférico a la transición energética; puede ser un proveedor importante de los recursos necesarios para llevarla a cabo. Sin embargo, la extracción de minerales puede dañar los bosques, contaminar el agua y exponer a las comunidades locales a graves riesgos ambientales y sociales.

La pregunta fundamental se está volviendo, por lo tanto, cada vez más difícil: ¿cómo puede el mundo acelerar la transición energética sin simplemente trasladar la destrucción ambiental de una parte del planeta a otra? El Congo ilustra una de las contradicciones geopolíticas centrales de la transición verde. Si las economías ricas reducen su dependencia de los combustibles fósiles mientras los costos ambientales y sociales de obtener los minerales necesarios para esa transición se concentran en países más pobres productores de recursos, la transición corre el riesgo de volverse política y moralmente insostenible.

La descarbonización no puede, por lo tanto, separarse de la gobernanza de las cadenas de suministro que hacen posible la descarbonización. El objetivo no debería ser impedir que los países ricos en recursos desarrollen sus economías minerales, sino garantizar que el desarrollo legítimo de los recursos genere beneficios económicos sin crear un sistema paralelo de destrucción ambiental, corrupción y explotación criminal.

Este debate está entrando cada vez más en el ámbito del derecho internacional. Un artículo del *Financial Times* de 2026, titulado "El ecocidio es un crimen contra la humanidad", presentó el argumento de la ministra de Medio Ambiente del Congo de que la grave destrucción ambiental asociada con la minería, la extracción de combustibles fósiles, la agricultura y los conflictos armados debería ser tratada como una cuestión de justicia internacional.

Ella promueve el reconocimiento del ecocidio como un crimen internacional, argumentando que la destrucción ambiental grave, generalizada o prolongada debería tener consecuencias comparables a las de otros crímenes internacionales graves. La importancia de esta propuesta va más allá de la definición jurídica precisa del ecocidio, porque refleja un esfuerzo por redefinir la destrucción ambiental como una cuestión de justicia y seguridad internacionales, y no simplemente como un asunto de regulación ambiental nacional.

Tal enfoque podría adquirir una relevancia creciente cuando la destrucción ambiental esté vinculada con conflictos armados, minería ilegal, corrupción, desplazamiento forzado, explotación de comunidades indígenas, corporaciones transnacionales y mercados internacionales de materias primas.

Al mismo tiempo, el desarrollo de mecanismos jurídicos internacionales requeriría definiciones cuidadosas y estándares de prueba creíbles. Si los delitos ambientales van a internacionalizarse, el marco debe ser suficientemente preciso para evitar una aplicación política selectiva, pero también lo suficientemente sólido para disuadir la destrucción deliberada o temeraria a gran escala.

La Amazonía enfrenta una combinación similar, aunque distinta, de presiones. Brasil ha demostrado que la deforestación no es una fuerza incontrolable. La aplicación de la ley, el monitoreo satelital, las áreas protegidas, las restricciones financieras y el compromiso político han producido reducciones sustanciales de la deforestación en los últimos años.

Esto es estratégicamente importante porque demuestra que las políticas estatales pueden modificar los incentivos económicos que rodean la destrucción forestal. Sin embargo, los avances siguen siendo frágiles. La minería ilegal, los incendios, la expansión agrícola, la apropiación ilegal de tierras, el desarrollo de infraestructura y el cambio climático continúan ejerciendo una enorme presión sobre la Amazonía. La minería ilegal de oro es particularmente reveladora porque demuestra cómo el crimen ambiental puede integrarse en redes financieras y comerciales sofisticadas.

Una investigación de Reuters de mayo de 2026, basada en investigaciones de Greenpeace, encontró que 26,8 toneladas de oro, valoradas en aproximadamente 3.880 millones de dólares, habían sido asociadas con permisos mineros que no mostraban evidencia de actividad minera real.

Estos “permisos fantasma” pueden potencialmente dar al oro extraído ilegalmente una apariencia de legalidad. La importancia estratégica es mayor que el valor del oro en sí. La minería ilegal depende cada vez más de financiación, equipos, transporte, documentación, corrupción, intermediarios, comerciantes de materias primas, refinerías y mercados internacionales.

La extracción en el bosque es solo la primera etapa de una economía criminal mucho más amplia. Por lo tanto, el crimen ambiental debería entenderse cada vez más como una forma de delincuencia financiera organizada. Destruir maquinaria en el bosque o arrestar a mineros individuales puede interrumpir temporalmente la extracción, pero no necesariamente desmantela las redes que financian, transportan, legalizan y venden las materias primas.

La aplicación efectiva de la ley debe seguir cada vez más el dinero, identificar a los beneficiarios finales, investigar a funcionarios corruptos e intermediarios, rastrear los flujos de materias primas y atacar las estructuras del mercado internacional que hacen rentable la extracción ilegal.

La Amazonía colombiana ofrece una ilustración aún más clara de la convergencia entre la destrucción ambiental y la inseguridad territorial. El cultivo de coca, la minería ilegal de oro, la tala ilegal, la ganadería y la apropiación de tierras pueden interactuar con las actividades de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Las carreteras construidas para facilitar el acceso a zonas remotas pueden abrir los bosques a nuevos asentamientos, minería y agricultura.

El resultado puede convertirse en un ciclo de retroalimentación en el que el control territorial genera acceso a recursos naturales, los recursos naturales generan ingresos

y esos ingresos financian el control territorial. Cuando el Estado es débil, los grupos armados pueden ejercer autoridad sobre minas, carreteras, zonas de cultivo de coca y territorios forestales.

Pueden imponer impuestos, regular la actividad económica y beneficiarse directa o indirectamente del oro, la madera, el ganado y los narcóticos. La destrucción ambiental se convierte entonces en algo más que una consecuencia de la actividad criminal; puede convertirse en parte del mecanismo de financiación del poder territorial.

Por eso, la política ambiental y la política de seguridad ya no pueden tratarse como asuntos separados. El debate político en torno al gobierno de Gustavo Petro y su estrategia de Paz Total constituye un ejemplo claro. Petro llegó al poder prometiendo un enfoque diferente frente al conflicto armado colombiano y la guerra contra las drogas. Su gobierno sostuvo que décadas de una política antidrogas predominantemente militarizada no habían logrado eliminar las causas económicas y sociales subyacentes de la producción de coca y buscó, en cambio, negociar con grupos armados mientras abordaba las condiciones socioeconómicas que sostenían las economías ilícitas.

Petro también convirtió la protección ambiental y la política climática en elementos centrales de su mensaje político. Sin embargo, la experiencia de la Paz Total demostró la dificultad de combinar las negociaciones con la restauración de la autoridad territorial del Estado. Durante el período de Petro se establecieron negociaciones y ceses al fuego con varias organizaciones armadas y criminales, lo que les permitió expandirse dramáticamente en Colombia tras el llamado Pacto de la Picota durante la campaña presidencial de 2022, en la que Petro prometió a grupos armados ilegales y al crimen organizado: seguir como de costumbre, inmunidad y control territorial. Durante su presidencia, dichos grupos cogobernaron con Petro, recibieron inteligencia militar y policial de la administración de Petro y se hicieron extremadamente ricos.

Como resultado, esos grupos criminales llevaron a Petro, Iván Cepeda y a su movimiento, el Pacto Histórico, 4 millones de votos de ventaja en las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 en Colombia. Petro empoderó durante cuatro años a grupos criminales en Colombia y en toda la región, incluidos el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, el Clan del Golfo y otros.

La situación política colombiana ha entrado ahora en una nueva fase. Gustavo Petro dejó el cargo en agosto de 2026, y Abelardo de la Espriella asumió la presidencia con un enfoque considerablemente más confrontativo frente a los grupos armados, el narcotráfico y los cultivos ilícitos de coca.

Su gobierno ha señalado un mayor énfasis en la aplicación de políticas de seguridad y un alejamiento significativo del enfoque de Petro respecto de las negociaciones con organizaciones armadas. La nueva administración enfrenta, por lo tanto, una prueba fundamental: determinar si unas políticas de seguridad más firmes pueden restaurar la autoridad estatal sin limitarse a desplazar las economías criminales de un territorio a otro.

Un retorno a una estrategia predominantemente basada en la seguridad podría fortalecer la autoridad estatal en zonas anteriormente dominadas por grupos armados, pero la presión militar por sí sola no puede eliminar las estructuras económicas que hacen rentables la minería ilegal, el cultivo de coca, la tala y la apropiación de tierras.

La pregunta central para el nuevo gobierno de Colombia no es simplemente si puede aumentar la presión militar. Es si puede establecer un control estatal duradero mientras crea simultáneamente economías rurales legítimas, fortalece la aplicación de la legislación ambiental, amplía la justicia y la infraestructura, y desarticula las redes financieras que sostienen a las organizaciones criminales.

Las afirmaciones relacionadas con Gustavo Petro, Iván Cepeda, el Pacto Histórico u otras figuras políticas han circulado públicamente, incluidas acusaciones relacionadas con la campaña presidencial de 2022. Al mismo tiempo, gobiernos, movimientos políticos y organizaciones de defensa pueden formular sus propias acusaciones sobre desinformación con motivaciones políticas.

La respuesta adecuada es, por lo tanto, una transparencia basada en evidencia: seguir el dinero, identificar las estructuras de propiedad, revelar la financiación, verificar las redes digitales y distinguir las relaciones documentadas de las afirmaciones políticas.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. Dinámicas similares existen en otras partes del mundo donde organizaciones criminales combinan control territorial, economías ilícitas, corrupción, influencia política y redes internacionales para proteger y ampliar sus intereses.

Las materias primas particulares difieren de una región a otra, pero la economía política subyacente es similar. El control territorial genera acceso a los recursos, los recursos generan ingresos, los ingresos generan poder político y coercitivo, y el poder político o territorial protege el sistema económico subyacente.

El Congo presenta una dinámica relacionada. El conflicto armado, la minería ilegal y la explotación de recursos naturales pueden reforzarse mutuamente. En zonas donde las instituciones estatales son débiles, el control de recursos valiosos puede convertirse en una importante fuente de financiación para actores armados y estructuras de poder locales. Por lo tanto, la degradación ambiental puede quedar entrelazada con cuestiones de seguridad humana, gobernanza y resolución de conflictos.

Por eso, la protección ambiental en Estados frágiles no puede tratarse simplemente como un programa técnico de conservación. El cambio climático hace que estas dinámicas sean considerablemente más urgentes. Los científicos advierten cada vez más que la resiliencia de la Amazonía está siendo puesta a prueba por la combinación de deforestación, aumento de las temperaturas, sequías y cambios en los patrones de precipitación.

Investigaciones recientes de 2026 han identificado evidencia de posibles transiciones en el estado de la vegetación bajo escenarios de calentamiento, incluidos riesgos asociados con la disminución de las precipitaciones y de la humedad del suelo. La preocupación no consiste simplemente en que habrá menos árboles. La preocupación más profunda es que partes suficientemente degradadas del bosque podrían volverse progresivamente menos capaces de mantener las condiciones húmedas de las que dependen los ecosistemas de selva tropical. Esto crea un peligroso mecanismo de retroalimentación.

La destrucción forestal puede reducir la capacidad de los ecosistemas para reciclar humedad y almacenar carbono. El

cambio climático aumenta el estrés provocado por el calor y la sequía. La sequía incrementa la vulnerabilidad a los incendios y a una mayor degradación. Una mayor pérdida forestal puede entonces reforzar las presiones climáticas originales.

El riesgo no consiste necesariamente en que toda la Amazonía cruce de repente un único punto de inflexión global, sino en que puedan surgir umbrales regionales y cambios irreversibles en los ecosistemas de manera desigual, haciendo que la prevención sea considerablemente más valiosa que intentar restaurar los sistemas ecológicos después de que hayan sufrido una degradación severa.

La Cuenca del Congo enfrenta un peligro relacionado. Sigue siendo uno de los grandes ecosistemas del mundo para el almacenamiento de carbono y la regulación climática, pero recibe considerablemente menos atención científica y financiera internacional que la Amazonía. La comunidad internacional reconoce cada vez más a la Amazonía como un activo climático mundial, mientras que el Congo suele abordarse principalmente desde las perspectivas del conflicto, la pobreza, el desarrollo y los minerales. Ese enfoque es incompleto.

La Cuenca del Congo debería entenderse simultáneamente como un sistema de regulación climática, una reserva de biodiversidad, una fuente de minerales críticos, un sistema agrícola y de agua dulce, una fuente de medios de vida, un entorno de seguridad y un posible escenario para economías criminales transnacionales.

La cuestión estratégica más amplia, por lo tanto, es mucho mayor que “¿Cómo detenemos la deforestación?”. La verdadera pregunta es cómo crear un sistema económico y político en el que mantener vivo el bosque sea más valioso que destruirlo. Esto requiere una arquitectura de políticas que conecte la protección ambiental con la seguridad, el desarrollo económico, la regulación financiera, el comercio internacional y la política climática.

Los gobiernos necesitan instituciones más fuertes y un control territorial efectivo. Las comunidades indígenas y locales necesitan derechos seguros sobre la tierra, participación política y alternativas económicas legítimas. La minería y la tala ilegales deben combatirse no solo en el punto de extracción, sino también mediante las redes financieras que las hacen rentables.

Las empresas internacionales necesitan cadenas de suministro creíbles y trazables. Los países que se benefician de los servicios climáticos y ecológicos proporcionados por los bosques amazónicos y del Congo deben contribuir financieramente a su protección. Esto es particularmente importante para la transición energética mundial. El mundo necesita cobalto, cobre, litio y otros minerales para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y ampliar las energías renovables y la electrificación. Pero la transición no puede convertirse simplemente en otra forma de extracción de recursos en la que los costos ambientales y sociales se concentren en regiones más pobres mientras los beneficios económicos y tecnológicos se disfrutan en otros lugares.

Una economía verde que destruya los bosques tropicales contendría una contradicción fundamental. Por lo tanto, la política de minerales críticos debería centrarse cada vez más en la trazabilidad, los estándares ambientales y la transparencia financiera. El objetivo no debería ser impedir que los países en desarrollo ricos en recursos exploten sus

recursos naturales, sino garantizar que los productores legítimos reciban los beneficios mientras los operadores ilegales pierden el acceso a los mercados internacionales.

El mismo principio debería aplicarse al oro, la madera y otras materias primas asociadas con la deforestación y las economías ilícitas. Las evaluaciones ambientales también deberían tener en cuenta la huella indirecta de la extracción. Una mina no debería evaluarse únicamente según el número de hectáreas despejadas dentro de sus límites formales. Las carreteras, los asentamientos, la agricultura, la migración y la actividad económica informal pueden generar impactos secundarios mucho mayores.

Esto es particularmente importante en la Cuenca del Congo, donde las investigaciones han demostrado que la deforestación indirecta asociada con la minería puede superar sustancialmente la superficie despejada directamente en los sitios mineros. Las comunidades indígenas y locales deberían ser tratadas como actores políticos centrales y no simplemente como beneficiarias de programas ambientales. Los derechos territoriales seguros, el acceso a la justicia, la participación política y las oportunidades económicas legítimas pueden fortalecer tanto la protección ambiental como la legitimidad estatal.

En muchas zonas remotas, las comunidades se encuentran entre los primeros actores que observan la minería ilegal, la tala y la apropiación de tierras. Su protección y participación deberían, por lo tanto, considerarse parte de la gobernanza territorial. La financiación internacional es igualmente importante. Si los bosques tropicales proporcionan beneficios climáticos globales, la comunidad internacional debería contribuir al costo de mantenerlos.

Sin embargo, los mecanismos de financiación forestal deberían estar vinculados a resultados medibles, monitoreo transparente y sólidas salvaguardias para las comunidades indígenas y locales. Los pagos deberían recompensar una conservación genuina y no simplemente compensar pérdidas proyectadas que podrían no haberse producido.

El crimen ambiental también debería abordarse cada vez más mediante la misma arquitectura financiera utilizada contra otras formas de delincuencia organizada transnacional. Los gobiernos deberían perseguir a financiadores, proveedores de equipos, funcionarios corruptos, redes de transporte, empresas fachada, canales de lavado de dinero, intermediarios de materias primas, exportadores, importadores y beneficiarios finales.

El objetivo debería ser dismantlar el sistema económico que hace rentable la destrucción ambiental, en lugar de limitarse a arrestar individuos en el punto de extracción. La política de seguridad y la política ambiental también deben integrarse. En regiones controladas por grupos armados, la política ambiental no puede implementarse independientemente de la política de seguridad. Al mismo tiempo, las estrategias de seguridad que destruyen la infraestructura criminal sin proporcionar alternativas económicas legítimas pueden simplemente desplazar geográficamente la actividad ilícita.

El objetivo debería ser, por lo tanto, una gobernanza territorial duradera y no un control militar temporal. La Amazonía y la Cuenca del Congo representan una prueba más amplia para el sistema internacional porque los recursos naturales se están convirtiendo simultáneamente en activos económicos, materias primas estratégicas, fuentes de influencia política y posibles instrumentos de conflicto.

El oro puede financiar organizaciones criminales. El cobalto y el cobre pueden convertirse en activos estratégicos en la competencia geopolítica. La madera y el ganado pueden impulsar la expansión de las fronteras agrícolas. La coca puede financiar grupos armados. Los bosques pueden proporcionar servicios climáticos e hídricos cuyo enorme valor económico no está adecuadamente reflejado en los mercados convencionales de materias primas.

El fracaso central ocurre cuando los mercados recompensan la destrucción de manera más eficaz que la conservación. Si un minero ilegal puede obtener grandes ganancias destruyendo un bosque mientras el Estado y la población local reciben pocos beneficios económicos por mantener ese bosque intacto, la regulación ambiental seguirá siendo estructuralmente vulnerable. La conservación no puede depender indefinidamente de llamamientos morales contra los incentivos económicos. Los propios incentivos deben cambiar.

Por lo tanto, la Amazonía y el Congo deberían entenderse como infraestructura natural estratégica del planeta. Regular el agua, almacenan carbono, sostienen la biodiversidad, apoyan a millones de personas e influyen en sistemas agrícolas y económicos mucho más allá de sus fronteras.

Su destrucción no supone simplemente la pérdida de árboles. Puede debilitar la autoridad estatal, fortalecer a las organizaciones criminales, desestabilizar comunidades, aumentar los riesgos en los mercados de materias primas, debilitar la resiliencia climática e intensificar la competencia por recursos estratégicos.

La alentadora reducción de la deforestación en la Amazonía brasileña demuestra que una política gubernamental eficaz puede cambiar la trayectoria. Pero la persistencia de la minería ilegal, las finanzas criminales, la inseguridad territorial y el estrés climático demuestra que los avances ambientales siguen siendo vulnerables. Brasil demuestra que la capacidad estatal puede producir avances ambientales medibles, mientras que Colombia y el Congo demuestran que la política ambiental se vuelve mucho más difícil cuando las organizaciones criminales conservan poder territorial y económico.

Las advertencias que surgen del Congo, la Amazonía y Colombia son, por lo tanto, claras: los recursos naturales se están convirtiendo cada vez más en fuentes tanto de riqueza como de conflicto. El desafío estratégico consiste en impedir que el control de esos recursos se convierta en un mecanismo de poder criminal y destrucción ambiental.

En consecuencia, la comunidad internacional debería superar una agenda de conservación limitada y construir un marco más amplio que combine protección forestal, seguridad territorial, derechos indígenas, desarrollo responsable de minerales, transparencia financiera, medidas anticorrupción, cadenas de suministro creíbles y financiación climática internacional.

El objetivo no debería ser congelar el desarrollo económico ni impedir que los países ricos en recursos se beneficien de su riqueza natural. Debería ser cambiar la dirección del desarrollo. Una estrategia exitosa haría que mantener el bosque en pie fuera más valioso que destruirlo, que la extracción legítima de recursos fuera más rentable que la extracción ilegal y que la autoridad estatal fuera más fuerte que el control territorial criminal.

Ese es, en última instancia, el desafío que enfrentan la Amazonía y la Cuenca del Congo y, cada vez más, el propio sistema internacional.

360° Geopolítica.

Referencias clave

La Cuenca del Congo

[Financial Times — “Ecocide is a crime against humanity”](#)

[Financial Times — “Struggles of the world's 'second lung' put one of the most beloved crops at risk”](#)

[Mongabay — Congo Basin deforestation pledge and challenges, 2026](#)

[Global Nature Watch — Congo Basin forest loss, 2026](#)

Amazonia

[Reuters — “Illegal miners extract billions in Amazon gold despite Brazil crackdown”](#)

[Financial Times — Amazon Soy Moratorium](#)

[Financial Times — Carlos Nobre and the Amazon tipping point](#)

[Associated Press — Gold mining, deforestation and mercury in the Amazon](#)

Colombia / Petro / Economías ilegales

[360 Radio — Petro, *Paz Total* and security criticism](#)

[The Guardian — Colombian Amazon, cocaine, gold, armed groups and cattle](#)

360° Geopolítica —Petro, el depredador: asesinatos masivos y devastación ambiental en Colombia

El peligro no radica simplemente en la desaparición de los bosques. Es la convergencia de la explotación de los recursos naturales, las economías ilegales, la violencia, la débil gobernanza y el cambio climático, agravada en Colombia por la controvertida política del gobierno de Petro de negociar con grupos armados ilegales y organizaciones criminales y, a juicio de algunos analistas, de facto cogobernar con ellos. El resultado es una peligrosa erosión tanto de la protección ambiental como de la autoridad del Estado sobre territorios estratégicos y recursos naturales.